

Naciones Unidas ASAMBLEA GENERAL

DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 694a.
SESION

Jueves 12 de octubre de 1961,
a las 10.55 horas

NUEVA YORK

SUMARIO

	Página
Tema 77 del programa:	
Ampliación de la Comisión de Derecho Inter- nacional (continuación)	35

Presidente: Sr. César A. QUINTERO (Panamá).

TEMA 77 DEL PROGRAMA

Ampliación de la Comisión de Derecho Internacional
(A/4805, A/C.6/L.481 y Add.1, A/C.6/L.482, L.483 y
Add.1) (continuación)

1. El Sr. DE OBALDIA (Panamá) manifiesta que su país, que militar y económicamente es débil, atribuye quizás aún más importancia que otros a la existencia de relaciones internacionales fundadas en el derecho. Por esta razón, considera que la Comisión de Derecho Internacional es uno de los órganos más importantes de las Naciones Unidas.

2. Como ya se ha dicho, esa Comisión es un órgano técnico y científico en cuyos trabajos y decisiones no deben entrar, y menos aún prevalecer, consideraciones de carácter político. Sin embargo, no cabe ignorar que los órganos principales de las Naciones Unidas deben reflejar, de un modo u otro, las realidades del mundo moderno, es decir, en términos sencillos y concretos, las realidades políticas.

3. Al crearse en 1947 la Comisión de Derecho Internacional, las Naciones Unidas sólo contaban con 57 Miembros, y se juzgó necesario crear 15 puestos para representar a los diferentes grupos. Posteriormente, al ingresar en las Naciones Unidas nuevos países — hecho político — se juzgó conveniente aumentar dicho número que en 1956 ascendía a 21.

4. La liberación de los pueblos del continente africano y su ingreso a las Naciones Unidas en número cada vez mayor es otra realidad política a la que es preciso hacer frente ahora. La manera más sencilla, más equitativa y más expedita de hacerlo consiste en ampliar la Comisión de Derecho Internacional, admitiendo en ella a los representantes de los nuevos Estados del África central y meridional.

5. Por lo que respecta al número de miembros de la Comisión, el Sr. de Obaldía no cree que haya verdaderamente un número óptimo. En 1949, la Comisión tenía la convicción de que 15 era el número óptimo. Ahora bien, en 1956 se le aumentó hasta 21 sin que, al parecer, ello hubiera comprometido la eficacia de dicho órgano. La eficacia y la calidad de los trabajos de la Comisión dependen, ante todo, de la calidad de sus miembros, no de su número. Cuando llegue el momento, los propios miembros de la Comisión tendrán que superar las dificultades a que pueda dar lugar una nueva ampliación.

6. En cuanto a la sugestión hecha por algunas delegaciones de que se proceda a una redistribución completa de los asientos, Panamá no cree que deba revisarse el pacto de caballeros de 1956, concluido después de laboriosas negociaciones, de muchos esfuerzos y de importantes concesiones mutuas. Por lo demás, la situación no parece justificarlo en modo alguno. El único acontecimiento nuevo ocurrido desde 1956 es la presencia en las Naciones Unidas de los nuevos Estados africanos. Para tener en cuenta este hecho basta dar cabida en la Comisión a los representantes de estos nuevos miembros. Por consiguiente, la delegación de Panamá apoya el proyecto de resolución (A/C.6/L.481 y Add.1), sin oponerse, sin embargo, a que se admitan en la Comisión de Derecho Internacional a tres o cuatro representantes africanos, si tal es, en definitiva, el deseo de la mayoría de los miembros de la Sexta Comisión.

7. El Sr. REYES (Colombia) desea precisar la declaración que hiciera en la 689a. sesión. Para ello se referirá de manera más especial a las observaciones formuladas por el representante de la URSS en la misma sesión. Al reconocer que algunos Estados de África no estaban representados de manera equitativa en la Comisión de Derecho Internacional, dicho representante ha introducido muy hábilmente en el debate un nuevo elemento: el de la redistribución general de puestos, ya que, según él, la distribución actual es injusta, y los Estados "socialistas" tienen también, a su juicio, derecho a ejercer en dicha Comisión mayor influencia de la que han ejercido hasta ahora. El señor Reyes ha visto con alguna sorpresa la manera insólita como el representante de la URSS ha introducido con ello un elemento político en una discusión técnica. Cabe preguntarse si el representante de la URSS desea colorear de socialismo al derecho internacional, y si ésta es la razón por la cual quiere que los países socialistas puedan ejercer mayor "influencia". Planteado el problema en estos términos, se corre el riesgo, al parecer, de entrar en un terreno sumamente peligroso y de introducir las tiranteces de la guerra fría en una esfera en la que no deben intervenir en forma alguna.

8. Otras delegaciones, en particular las de los países de Europa oriental, han sostenido, a su vez, que el bloque socialista debe estar más ampliamente representado en la Comisión, precisamente en razón de su ideología política. En apoyo de esta tesis dichas delegaciones han alegado que no se puede disociar la política del derecho. Sobre este mismo punto, el de las relaciones entre la política y el derecho, se han escuchado otras opiniones que no proceden precisamente del campo socialista, en particular la del Líbano (690a. sesión, párr. 22) y la de Nigeria (692a. sesión, párr. 22), según las cuales no es posible considerar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación sin tener también en cuenta la evolución política del mundo.

9. Desde luego, la delegación de Colombia no ha querido en ningún momento desconocer las profundas relaciones que existen entre el derecho y la política. Es evidente que todo sistema económico, social o jurídico va ligado a una determinada concepción política y que, a su vez, todo sistema político supone una cierta concepción del hombre, de la sociedad, del Estado, del mundo e incluso de Dios. Por otra parte, así es como lo entendía la humanidad en una época que hoy se considera poco ilustrada, pero que en realidad ha sido una de las más clarividentes — en la que existía una jerarquía de valores y donde la teología, la religión, la moral, la política, la economía y el derecho se consideraban inseparables. Las contradicciones y desastres del mundo contemporáneo nacen de la destrucción de esta unidad. El divorcio de la política y la moral, ocurrido en los albores de la época moderna, ha dado origen a toda clase de abusos: la separación de la economía y de la ética ha hecho posibles los abusos del capitalismo, y la ruptura de los vínculos entre la moral y el derecho ha deshumanizado las instituciones y las normas jurídicas bajo el signo del utilitarismo.

10. Por consiguiente, es innegable que todo lo que afecta al hombre, afecta invariablemente a la política, y es natural que las concepciones políticas, que son en el fondo concepciones filosóficas, influyan en el espíritu tanto del derecho privado como del derecho público.

11. Pero cuando algunos tratan de acentuar la influencia de un sistema político en el desarrollo del derecho internacional, conviene sopesar las consecuencias de esta influencia. Ante todo, hay que recordar que toda política debe ponerse al servicio de la persona humana. Es evidente que la política deberá preocuparse también del destino colectivo de la humanidad, con el fin de orientarlo. Pero, en uno y otro caso, la persona humana deberá ser siempre su preocupación central, su punto de partida y de llegada. ¿De qué servirían, en efecto, los progresos de la técnica y de la ciencia, las conquistas espectaculares de la tierra y del espacio, si tales conquistas hubieran de lograrse a costa de la libertad y de la dignidad del hombre?

12. La delegación de Colombia no se asusta de la presencia de la política, en la vieja y noble acepción de este término, cuando se pone al servicio de las libertades y de los derechos fundamentales de la persona humana, y si se está verdaderamente apegado a estos principios no es necesario insistir en una distribución aritmética de los puestos. Pero si, por el contrario, se trata de suscitar una lucha sorda entre las Potencias, de poner en juego las influencias y la propaganda, entonces hay que denunciar enérgicamente la estratagema, porque ya no se trataría de una lucha por el progreso de la humanidad sino por mezquinos intereses de grupo.

13. El representante del Líbano declaró que la política había tenido un efecto decisivo en el progreso del derecho internacional contemporáneo. Los países socialistas, por su parte, llegan prácticamente a afirmar que son ellos los que han inventado el principio de la libre determinación de los pueblos y el de la soberanía sobre los recursos naturales. También esta afirmación es discutible. En materia de derecho internacional, al igual que en otras muchas esferas, principios que se tienen por recientes no siempre lo son.

14. El representante de España recordó en la 691a. sesión que ya en la época de la conquista de América existía una preocupación por el principio de la libre

determinación y que el principio de la igualdad de los pueblos y de los hombres, que constituye la base misma de la teoría anticolonialista, se remonta al Congreso de teólogos celebrado en Valladolid en 1494. Esta teoría, hoy triunfante, no se halla ligada en modo alguno a la aparición de tal o cual ideología nueva. Tal vez pudiera, incluso, decirse que es precisamente fundándose en los principios tradicionales como dicha teoría podría encorjar sus posibilidades más fecundas de renovación. La verdad es que el mundo presencia hoy un admirable despertar universal, y que los pueblos, habiendo adquirido conciencia de sus derechos, se aprestan a una lucha a muerte para conquistarlos. Es preciso congratularse de la derrota del colonialismo y saludar el advenimiento de la libertad de los pueblos. La delegación de Colombia, por su parte, espera que, al igual que Sierra Leona, otras muchas naciones independientes vengán pronto a aumentar el número de Miembros de las Naciones Unidas.

15. Pero si bien el viejo colonialismo ha podido ser exterminado, conviene velar para que no sea sustituido por un colonialismo nuevo, peor que el anterior, que so pretexto de una solidaridad ideológica, encubriría la esclavitud de los pueblos y la violación de los derechos del hombre.

16. Conviene subrayar, finalmente, que el progreso de derecho internacional no reside tanto en la definición de los principios y de las normas como en su aplicación. A este respecto, el señor Reyes no comprende cómo puede conciliarse el principio de la libre determinación de los pueblos con la dictadura del proletariado, dogma socialista, o cómo el principio de la no intervención puede armonizarse con la existencia de organismos internacionales de acción política que tienen como objetivo final la conquista del poder político y la imposición de un orden social determinado. Lo mismo ocurre en la esfera de los derechos del hombre. Esta es la razón por la cual la delegación de Colombia ha insistido siempre, y sigue insistiendo, en que la creación de los organismos adecuados para asegurar la protección de esos derechos corra parejas con el enunciado de tales principios.

17. Para concluir, después de haber indicado las razones por las cuales no está justificada una representación de carácter político, el Sr. Reyes añade que dicha representación no sería posible en la práctica ni se ajustaría al espíritu del Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional. Por ello, la delegación de Colombia se opondrá a toda redistribución de los puestos existentes. Únicamente tratará de lograr que se amplíe la Comisión, para asegurar una representación equitativa a los países afroasiáticos, y de que se aumente al mismo tiempo la representación de su propia región, lo que está plenamente justificado si se tiene en cuenta la importancia del sistema jurídico que la América Latina ha creado y perfeccionado.

18. El Sr. KIKHIA (Libia), hablando en su carácter de coautor de la enmienda (A/C.6/L.483 y Add.1), manifiesta que la propuesta de los Estados Unidos (689a. sesión, párr. 4), a pesar de que sin duda constituye un avance para los países afro-asiáticos, no es, sin embargo, la solución más equitativa. Como hiciera observar el representante de la URSS (*Ibid.*, párr. 12), la distribución actual de los puestos en la Comisión de Derecho Internacional no refleja ya la realidad internacional, ni se ajusta al espíritu del Estatuto de ese organismo. Parece que la mayoría de los representantes, sobre todo los de Asia y África, comparten este punto de vista.

19. La delegación de Libia no siente gran entusiasmo por la ampliación en sí, ya que, con buena voluntad, ni siquiera esto debería hacer falta. En su origen, la Comisión se concibió, con miras a su eficacia, como un órgano muy pequeño, de 11, 14 ó 15 miembros a lo sumo. Sin embargo, por razones de orden práctico y político, en 1956 hubo necesidad de aumentar este número a 21, al no conseguir por medio de elecciones — a pesar de que éstas ofrecían una ocasión oportuna — que se procediese a una redistribución que hubiera exigido sacrificios por parte de todos. Nuevamente ha surgido una situación análoga, y parece, una vez más, que el único medio práctico de restablecer la justicia es una nueva ampliación. Por tanto, consciente de la realidad, la delegación de Libia ha aceptado este principio.

20. Para asegurar un verdadero equilibrio, en lo sucesivo, es indispensable aumentar el número de miembros de la Comisión no a 23 sino a 25. Sin embargo, el Sr. Kikhia confía en que esta ampliación no redundará en perjuicio de la eficacia de los trabajos de la Comisión, que, a fin de evitar este peligro, podría crear subcomités, comités de redacción o grupos de trabajo.

21. Por lo que respecta a la distribución de los veinticinco puestos, la delegación de Libia apoya el plan sugerido por el representante de Ghana, es decir diez puestos para los países de Africa y Asia, siete para los de Europa occidental y América del Norte, cuatro para los de Europa oriental y cuatro para los de América Latina. Esta distribución parece la mejor, ya que tiene en cuenta el número total de Estados Miembros de las Naciones Unidas, las regiones geográficas, las grandes civilizaciones, los principales sistemas jurídicos, número de habitantes y, finalmente, la división del mundo en bloques políticos e ideológicos. Dicha distribución no impondría a ningún grupo grandes sacrificios; los países afro-asiáticos ganarían algunos puestos y Europa oriental uno solo, lo que parece justo y equitativo.

22. Además, la delegación de Libia no cree que haya que considerar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad constituyen un grupo distinto de Estados, ya que forman parte de los grupos que el Sr. Kikhia acaba de mencionar. En cambio, por razones evidentes cuya validez es difícil impugnar, la delegación de Libia estima que es necesario considerar que los países afro-asiáticos constituyen un solo grupo. Esto es tanto más necesario cuanto que actualmente no hay más que tres candidatos africanos, situación de hecho que habrá que normalizar cuando se celebren futuras elecciones. Por otra parte, la delegación de Libia, guiada por la preocupación de reforzar la cohesión africana y de salvaguardar la unidad afro-asiática, se opone a cualquier especificación de la representación africana. Libia no conoce más que una sola Africa, compuesta de un mosaico de razas, religiones, lenguas y civilizaciones, para formar una personalidad africana propia que se integra en el gran movimiento de los pueblos afro-asiáticos. Por consiguiente no cabe distinguir entre Africa del Norte, Africa al sur del Sahara, Africa blanca y Africa negra. Libia ha combatido siempre esta tendencia, contraria a los intereses africanos, y continuará haciéndolo.

23. En cuanto al pacto de caballeros de 1956, éste no fue más que un arreglo verbal, provisional y oficioso que para tener validez en las próximas elecciones debe contar con el consentimiento, expreso o tácito, de la Sexta Comisión. Por tanto, Libia invita a la Co-

misión a que trate de llegar a otro acuerdo amistoso sobre las bases propuestas por el representante de Ghana. En todo caso, la Sexta Comisión deberá pronunciarse sobre el pacto de caballeros de 1956 y decidir en forma clara si desea mantenerlo, modificarlo o revocarlo.

24. El Sr. CASTAÑEDA (México) aborda sin ninguna idea preconcebida el problema que se examina, que no se refiere a cuestiones de principio y cuya solución debería surgir, por tanto, del intercambio de ideas a que ha dado lugar el debate general. El Sr. Castañeda lamenta que los miembros de la Sexta Comisión se hayan dividido desde el principio en grupos rivales, como si se tratase de un debate político. Por su parte, cree que nada impide que se modifique el acuerdo de 1956, aunque no considera que sea necesario revisarlo radicalmente y partir, por así decirlo, de cero.

25. El representante de España ha dicho que puesto que la función del derecho consiste en garantizar la estabilidad y la seguridad de las relaciones humanas, no se pueden revisar impunemente los acuerdos celebrados en el pasado, ya que entonces se carecería de toda base en que apoyar el porvenir, creando así una inseguridad peligrosa. La delegación de México no comparte esa opinión, que carece de toda lógica si al mismo tiempo se propone el aumento del número de miembros fijado en el acuerdo de 1956, puesto que todo cambio acarrearía forzosamente modificaciones de dicho acuerdo. Por otra parte, el acuerdo de 1956 es típico de las situaciones que por su propia naturaleza exigen revisiones periódicas.

26. Una vez dicho esto, es preciso tener en cuenta que no es útil proceder a la revisión total del acuerdo de 1956, ya que en él se fijan las líneas generales que deben seguirse para lograr una composición equilibrada de la Comisión de Derecho Internacional. Aunque dicho acuerdo no es perfecto, es, sin embargo, fundamentalmente conveniente. Parece suficiente, para las necesidades del momento, con aumentar el número de puestos, sin que se modifiquen ni disminuyan los puestos ya acordados.

27. En cuanto a los principios que deben regir la composición de dicho organismo cabe preguntarse hasta qué punto los criterios que fija el artículo 8 del Estatuto excluyen las consideraciones políticas. Cuando se habla de los "principales sistemas jurídicos del mundo", se habla por lo general de un conjunto de concepciones fundamentales que presiden la organización de las instituciones jurídicas internas de un grupo de países. Se trata, por tanto, de una especie de "jus gentium" común a varios países, como por ejemplo el derecho romano, el anglosajón o el germánico. Pero este criterio es demasiado vago para determinar la composición de la Comisión de Derecho Internacional. Por el contrario, si se interpreta dicha expresión como la actitud que adoptan ciertos grupos de países hacia el derecho internacional y, sobre todo, hacia su desarrollo progresivo, es decir, hacia la creación de normas nuevas, el criterio es más realista. De este modo, la actitud de la América Latina difiere de la de aquellos países europeos de los que ha heredado sus instituciones jurídicas. Esto equivale a distinguir entre las diferentes actitudes que adoptan los distintos grupos de países ante los problemas internacionales contemporáneos, y en este caso, se quiera o no, se entra en la esfera política.

28. En lo que atañe a las "grandes civilizaciones" esto no constituye tampoco una orientación muy útil, puesto que es difícil definir las al margen de las agrupaciones regionales o políticas.

29. Como los criterios que se fijan en el Estatuto son difíciles de aplicar en la práctica, hay que recurrir al criterio clásico, que es el de la representación geográfica. Sin embargo, este criterio debe temperarse teniendo en cuenta los que señala el Estatuto, con inclusión del de la competencia, a que se refiere el artículo 2. Por ejemplo, la delegación de México estima que debe asignarse a la Europa occidental un número de puestos superior al que le correspondería si se procediera a la simple división aritmética de los Miembros de las Naciones Unidas. En efecto, el derecho internacional de Europa occidental comprende numerosas subdivisiones que han desempeñado y desempeñan aún un papel primordial en el desarrollo del derecho internacional, papel que no está en proporción con el número relativamente poco elevado de los países de dicha región. Esta es una realidad histórica innegable. Tales subdivisiones deben estar representadas en la Comisión de Derecho Internacional, en la medida de lo posible, sin que ello vaya en detrimento de las demás regiones del mundo. En consecuencia, el reconocimiento de la existencia de sistemas distintos constituye un factor de ponderación en cuanto a la estricta repartición geográfica. Otro de estos factores — y en este punto el Sr. Castañeda piensa en los países de Europa oriental — es la importancia política. Pretender elaborar actualmente el derecho internacional sin una participación suficiente de los países socialistas equivaldría a escribir sobre la arena.

30. Con respecto a los nuevos Estados africanos, la necesidad de que estén representados es evidente. Nadie pondrá en duda su derecho a participar en la elaboración de un derecho internacional que tenga en cuenta sus intereses.

31. En resumen, la delegación de México no tiene ideas preconcebidas sobre la mejor manera de equilibrar la composición de la Comisión de Derecho Internacional. Cree, en principio, que no conviene aumentar en exceso el número de sus miembros, pero estima que, sin elevarlo a la cifra de 25, sería difícil hacer justicia a todos los países. La distribución de estos 25 puestos debe hacerse por medio de negociaciones, pero en ningún caso debe ser en detrimento de la América Latina. En 1956 se asignaron a dicha región cinco puestos, uno de los cuales debía compartirse, por rotación, con un miembro del Commonwealth británico (véase A/4779, párr. 4). En vista de la contribución que la América Latina ha aportado al derecho internacional, sería injusto que no se le mantuvieran esos cinco puestos, teniendo en cuenta que el número total de miembros ha de aumentar.

32. El Sr. ORIBE (Uruguay) estima que debe respetarse el acuerdo de 1956, a reserva de que haya un aumento de puestos para los países del África, ya que dicho acuerdo descansa sobre el principio de la representación de los diversos sistemas jurídicos del mundo. La delegación del Uruguay apoyará, portanto, el proyecto conjunto de resolución que es favorable a los países de África. Acepta igualmente la idea que figura en la enmienda a dicho proyecto, ya que una diferencia de dos puestos no habrá de constituir ningún obstáculo a los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. En cuanto a la distribución de estos cuatro nuevos puestos, el Sr. Oribe, al igual que el representante de México, subraya que no debe hacerse a expensas de los países de la América Latina. El Uruguay está orgulloso de su tradición jurídica y, si bien está dispuesto a apoyar toda propuesta que permita que África aporte una mayor contribución al desarro-

llo universal del derecho de gentes, no aceptará que ello se haga en detrimento de la América Latina.

33. El Sr. SINHA (Nepal) dice que si el mundo desea continuar avanzando por el camino del progreso, sin destruirse, es indispensable que el orden mundial se edifique sobre la sólida cimentación del derecho internacional. Es por ello natural que despierte gran interés la cuestión de la ampliación de la Comisión de Derecho Internacional, que es precisamente el órgano encargado de elaborar las normas del derecho internacional. La delegación de Nepal aprueba la iniciativa que han tomado los Estados Unidos en favor de los países de África, pero estima que no basta con aumentar solamente dos puestos. En efecto, en los países de África y de Asia se encuentra más de la mitad de la población del globo y ellos representan culturas y civilizaciones a la vez muy antiguas y muy modernas; antiguas, puesto que se remontan a muchos siglos antes de Jesucristo, y modernas porque son estos países los que han visto nacer el principio de la libre determinación, como opuesto al principio del colonialismo. El Sr. Sinha no se cuenta entre los que creen que un pequeño aumento en el número de miembros de la Comisión de Derecho Internacional será perjudicial a los trabajos de este organismo. Dos puestos más no constituyen en realidad gran diferencia, y este aumento permitirá que se haga justicia a los países de África y de Asia. Sin embargo, la delegación de Nepal no insistirá en que se fije una cifra determinada, siempre que se protejan los intereses de los países débiles e insuficientemente representados. Sin denunciar el acuerdo de 1956, pide que sea revisado a fin de tener en cuenta los cambios ocurridos en la situación internacional y el aumento en el número de Miembros de las Naciones Unidas, y para que las normas elaboradas por la Comisión puedan inducir a la aceptación general, gracias a su carácter de universalidad.

34. El Sr. PLIMPTON (Estados Unidos de América) manifiesta que desea hacer algunas observaciones sobre algunos puntos del debate.

35. La delegación de Checoslovaquia ha pedido que se asignen a los países socialistas cinco puestos en la Comisión de Derecho Internacional (693a. sesión, párr. 4). El término "socialistas" carece de precisión, ya que no deben confundirse el socialismo y el comunismo. El socialismo existe en muchos países, bajo diversas formas y en grado más o menos avanzado. Por tanto, no conviene emplear el término "socialista" para designar al grupo de Estados de Europa oriental. En todo caso, la delegación de los Estados Unidos estima que esa petición es injustificada, y se opone, por las razones que va a exponer a continuación, a que se asignen a los países comunistas cuatro y, con mayor razón, cinco de los puestos de la Comisión.

36. Desde que los países comunistas se adhirieron al acuerdo de 1956 su número no ha aumentado. Si en 1956 el acuerdo les parecía justo y equitativo, debería parecerles tanto más generoso en el momento actual, ya que si bien el número total de Miembros de la Organización ha aumentado, no ha ocurrido otro tanto con los miembros de su grupo. A pesar de ello, los Estados Unidos no tienen la intención de pedir que se disminuya la representación de los países comunistas. Esos países constituyen aproximadamente la décima parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas — proporción que se refleja en la composición actual de la Comisión de Derecho Internacional — y, para que tuviesen cuatro puestos, sería preciso que esa Comisión contase con treinta miembros. Además, no

podría considerarse que todos los países del grupo comunista, por ejemplo, Ucrania y Bielorrusia, sean Estados Miembros distintos y autónomos. Por último, no parece necesario aumentar el número de puestos asignados a esos países, ya que sus portavoces respectivos sustentan siempre idénticos puntos de vista. Al asignar cinco puestos a los países comunistas se correría el riesgo de oír en la Comisión de Derecho Internacional cinco voces que entonarían la misma canción bajo la batuta del mismo director de orquesta. En realidad, bastaría con un solo puesto. Sin embargo, el Sr. Plimpton no sugiere que se reduzca a uno el número de puestos ocupados por los comunistas, únicamente desea poner de relieve el carácter monolítico de la opinión comunista. Por otra parte, algunos representantes estiman que los países de Asia están ya insuficientemente representados. Por tanto, si se aumentase el número de los puestos asignados a otros grupos, se disminuiría en consecuencia la representación del grupo afro-asiático, y la asignación de puestos adicionales al grupo comunista entrañaría necesariamente un incremento muy apreciable del número de miembros de la Comisión, lo que sería en detrimento de la eficacia de sus trabajos. El representante de los Estados Unidos estima, por tanto, que acceder a la petición de los países comunistas sería apartarse del objetivo esencial del proyecto conjunto de resolución que consiste en garantizar la adecuada representación de los países africanos en la Comisión de Derecho Internacional.

37. El Sr. Plimpton no tiene conocimiento de cuál ha sido la contribución que a partir de 1956 han hecho los comunistas al pensamiento jurídico, a la que aludiera el representante de Checoslovaquia al apoyar la ampliación que propuso. El orador recuerda las realizaciones de los Estados Unidos en la esfera jurídica, que se ponen de relieve especialmente en el programa de estudios emprendido por la Universidad de Harvard, en el interés que suscitan los estudios de derecho internacional en todas las universidades, y en la importancia de las publicaciones jurídicas.

38. Pero no se trata ahora de comparar la "producción" jurídica de los diversos países o grupos de países, sino de saber cómo se van a distribuir los nuevos puestos. El representante de los Estados Unidos se reserva el derecho de volver a referirse a esta cuestión después de haber consultado de nuevo con las demás delegaciones en cuanto al número de puestos que han de crearse y a su distribución.

39. El Sr. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en ejercicio de su derecho a contestar, dice que se desprende claramente de los debates que los Estados Unidos y las demás Potencias coloniales

han fracasado en su tentativa de mantener la posición dominante que tenían en la Comisión de Derecho Internacional. Los países afro-asiáticos, los países latinoamericanos y los países socialistas han rechazado el plan demasiado hábil de los Estados Unidos, que consistía en dar la limosna de dos puestos a los africanos, a quienes consideran juristas de segundo orden.

40. Habría sido de esperar que, movido por un espíritu de conciliación, el representante de los Estados Unidos, después de haber oído las objeciones formuladas por diversos representantes, no hubiera insistido en su propuesta. Pero se ha contentado con eludir la cuestión planteada en cuanto al número de puestos que su delegación piensa ofrecer al grupo afro-asiático, y se ha reservado el derecho de volver a examinar la cuestión. ¿Cree, pues, el representante de los Estados Unidos que puede seguir engañando a la opinión pública y obtener, gracias a maniobras subrepticias, el apoyo de la mayoría?

41. Después de comprobar el fracaso de su "iniciativa" tendiente a mantener la posición dominante de su país y de las Potencias occidentales en la Comisión de Derecho Internacional, el Sr. Plimpton ha tomado por el camino de la guerra fría, pensando disimular así su fracaso. Es seguro que si conociese las realizaciones de la URSS en la esfera jurídica, el representante de los Estados Unidos no podría poner en duda, como lo ha hecho, la contribución de los juristas soviéticos al derecho internacional. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a la que nadie puede negar importancia, constituye un ejemplo de esa contribución.

42. El Sr. Morozov cree que, en lugar de perderse en este tipo de digresiones, sería preciso intentar concertar un nuevo pacto de caballeros que garantice la distribución equitativa de los puestos de la Comisión de Derecho Internacional, ya que es inadmisibles que los países occidentales continúen ocupando en ella el doble de puestos que los países socialistas.

43. El Sr. Morozov se niega a seguir el camino tomado por el representante de los Estados Unidos, que intenta envenenar el debate, y pide a todos los representantes que hagan un esfuerzo por llegar a una solución justa y equitativa.

44. El Sr. PLIMPTON (Estados Unidos de América) manifiesta que no discute la contribución de los juristas soviéticos al derecho internacional; lo único que dijo fue que no ha estudiado los trabajos jurídicos publicados en la URSS desde 1956. También, por su parte, espera que en la Sexta Comisión reine un ambiente de serenidad.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.